

Nueva Sociedad Separatas

Luis Alberto Restrepo

Colombia: entre una paz elusiva y una guerra disolvente

Artículo aparecido en

Christian Freres / Karina Pacheco (editores): *Nuevos horizontes andinos. Escenarios regionales y políticas de la Unión Europea*, Recal / Aieti / Nueva Sociedad, Caracas, 2002, pp 39-60.



Colombia: entre una paz elusiva y una guerra disolvente

Luis Alberto Restrepo

Colombia enfrenta un incierto cambio de rumbo histórico con profundas implicaciones para la región andina y el continente. El conflicto armado y la inseguridad cubren casi todo el territorio nacional. El narcotráfico sigue boyante a pesar de que los grandes “capos” de los años 70 y 80 fueron eliminados o se encuentran en la cárcel. La corrupción política se ha extendido notablemente a partir de los 70, minando la legitimidad de las instituciones. A ello se suma, desde 1996, un serio deterioro de la economía que, en 1999, padeció la recesión más aguda de los últimos 70 años. En el fondo, el país enfrenta una crisis de hegemonía política y serias dificultades estructurales para ajustar su economía a las exigencias de la globalización. Todo ello está produciendo una progresiva desintegración del país que puede llevar a su disolución, pero también una silenciosa y profunda reorganización de fuerzas económicas, sociales y políticas, que podrían dar lugar, en un plazo prudencial, a un reordenamiento de la vida nacional.

El agudo enfrentamiento armado que padece Colombia afecta sobre todo a la población civil, contribuye decisivamente a las graves dificultades de la economía, amenaza la estabilidad del Estado y la integridad de la nación. Ya presente en Colombia desde los años 60, el conflicto se intensificó en la última década. El estrecho y creciente vínculo entre narcotráfico y organizaciones armadas ilegales, junto con la industria del secuestro, le dan a la guerra interna en Colombia su peculiar complejidad, autonomía, enconamiento y persistencia.

Cada año el enfrentamiento deja un saldo aproximado de 10.000 muertos, en su mayor parte civiles, más de 2.000 secuestros, incontables extorsiones, centenares de miles de desplazados, destrucción de la infraestructura petrolera y energética así como de numerosas poblaciones, y bloqueo frecuente del transporte terrestre, hasta el punto que el comercio interno se ha visto afectado y muchos colombianos no se atreven a movilizarse por tierra de una ciudad a otra. Además, si se rompieran los actuales diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país daría un paso decisivo hacia una guerra civil bastante amplia.

Durante los años 90, las dos guerrillas más fuertes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se extendieron por casi todo el territorio colombiano. Desbordaron las apartadas zonas de colonización rural y comenzaron a penetrar de manera sistemática, desde mediados de los 90, en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Mientras las FARC cuentan con entre 15.000 y 20.000 combatientes bien armados y equipados, el ELN podría disponer de unos 6.000.

A la par con las organizaciones insurgentes, los grupos de autodefensa o “paramilitares” han alcanzado una presencia igualmente nacional. Desde 1981,

narcotraficantes, terratenientes, comerciantes y dirigentes políticos locales comenzaron a crear grupos de autodefensa que contaban con un amplio apoyo en las fuerzas de defensa del Estado. En 1996, bajo el nombre actual de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los numerosos grupos existentes establecieron una coordinación nacional, que cuenta igualmente con amplia financiación derivada de las drogas y de aportes voluntarios de terratenientes, comerciantes y no pocos empresarios, sobre todo de Medellín, Cali y Bogotá. Las AUC poseen modernos equipos bélicos y una propia estrategia nacional para la lucha antiterrorista. Durante los tres últimos años han debilitado notablemente al ELN en el norte del país, desalojaron a las FARC de la estratégica región de Urabá y ahora les disputan el control sobre el departamento del Putumayo, en el sur, donde se encuentran los mayores cultivos de coca. Su crecimiento es exponencial. Según un documento del Gobierno, las AUC habrían pasado de tener 850 hombres en 1992 a contar con cerca de 5.900 miembros en 1999. Entre 1998 y 1999 aumentaron en 1.415 miembros (cf. Ministerio de Defensa). Muchos de los soldados y oficiales destituidos del ejército han pasado a engrosar las filas de las AUC, confirmando así la existencia de estrechos nexos entre ambos cuerpos armados.

Las fuerzas militares, entre tanto, se venían debilitando seriamente desde mediados de los 90. Por entonces se encontraban a la defensiva frente a las guerrillas y, para compensar su impotencia, dejaban un espacio cada vez mayor a la acción paramilitar. Con todo, en los dos últimos años, las fuerzas militares han incrementado el número de soldados profesionales (hoy 44.000), vienen modernizando sus equipos, recuperando la moral de combate y mejorando sus métodos de acción. De hecho, el conflicto comenzó a dar un giro táctico desde 1999. Mientras el ejército ha reagrupado unidades antes dispersas, incrementando su movilidad y prestándoles apoyo aéreo en el combate, las FARC han desistido de la confrontación masiva y directa con el ejército en el sur para fortalecer de nuevo su presencia en el norte, retornando a la "guerra de guerrillas" y atacando más bien a las policías de poblaciones situadas en sus áreas de influencia, con el fin de ejercer sobre éstas un mayor control militar y político.

El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) ha empeñado su gestión en la búsqueda e internacionalización de la paz. Ante la postración en la que se encontraba el Estado al acceder al poder en 1998, Pastrana le concedió a las FARC, sin contraprestación ni reglamentación alguna, una zona de despeje de 42.000 km² (dos veces el territorio de El Salvador) con el fin de crear un clima de confianza en sus dirigentes y adelantar con ellos eventuales conversaciones de paz. Sólo en enero de 2000 se instaló por fin la mesa de negociaciones, pero éstas no avanzaron en todo el año. Por el contrario, se multiplicaron los incidentes y ataques armados. En consecuencia, ha crecido sensiblemente el número de colombianos que abogan por el retorno a la guerra abierta con las FARC. Por su parte, el ELN se encuentra empeñado, desde hace dos años, en obtener el despeje del sur de Bolívar, una zona vital situada en el centro del país que antes estuvo bajo su influencia pero que actualmente se encuentra controlada por las AUC y las FARC. Para presionar la concesión del área mencionada,

el ELN viene adelantando, desde 1999, secuestros masivos, una destrucción sistemática de la infraestructura eléctrica y petrolera del país y un bloqueo frecuente de importantes carreteras nacionales. Aunque el Gobierno se ha mostrado dispuesto a desmilitarizar la zona bajo una estricta vigilancia internacional, las AUC y una parte de la población misma se resisten al despeje.

Ante el agudo contraste entre la creciente fortaleza guerrillera y una progresiva debilidad estatal, el gobierno de Pastrana solicitó, en 1999, ayuda financiera a la administración Clinton y, por solicitud de Washington, elaboró una primera versión del Plan Colombia¹. Su propuesta inicial apuntaba a un plan de paz que involucrara a las FARC en la sustitución de cultivos de coca con el apoyo de los dineros estadounidenses. Pero la presión del “zar antidrogas”, Barry McCaffrey, y de algunas agencias estadounidenses, la lucha entre congresistas republicanos y demócratas, la intransigencia de las FARC y el asesinato de tres indigenistas estadounidenses por esa organización hicieron que Washington reorientara el Plan hacia el fortalecimiento militar del Estado colombiano en una supuesta lucha contra las drogas. De allí nació el actual Plan Colombia, aprobado por el Congreso norteamericano el 30 de marzo de 2000² (García/2001b). Con este Plan, Estados Unidos se compromete de manera amplia en el conflicto interno de Colombia y da probablemente inicio a una escalada bélica que puede ser duradera.

Además del conflicto armado, Colombia padece una amplia violencia difusa. Desde comienzos de los años 90, se produce cada año en Colombia un promedio de 30.000 muertes violentas³, dos tercios de las cuales ocurren por fuera del conflicto.

1. “El Plan Colombia y el paquete de ayuda antinarcóticos de los Estados Unidos fueron producto de procesos paralelos que terminaron por vincularse de manera indisoluble. La idea del Plan Colombia fue formulada por el presidente Pastrana antes de asumir su cargo en 1998 y la propuesta del paquete de ayuda estadounidense empezaría a esbozarse casi un año más tarde. Los dos procesos habían empezado a interrelacionarse en los meses de mayo-junio de 1999 y se articularon en su implementación en el segundo semestre del año 2000” (García 2001a).

2. El paquete de ayuda antinarcóticos aprobado por el Congreso de EEUU fue de 1.319,1 millones de dólares, de los cuales 860,3 millones corresponden a asistencia para Colombia y el resto para los países vecinos (110 millones para Bolivia, 32 millones para Perú y 20 millones para Ecuador) y para las agencias estadounidenses comprometidas en operaciones antinarcóticas en la región andina. De los fondos aprobados para Colombia, 519,2 millones de dólares (60%) corresponden a asistencia militar, 123,1 millones (14%) para asistencia a la Policía Nacional, 68,5 millones (8%) para proyectos de desarrollo alternativo, 51 millones (6%) para promoción y defensa de los derechos humanos, 45 millones (5%) para fortalecimiento de las instituciones, 37,5 millones (4%) para ayuda a los desplazados, 13 millones (2%) para reforma judicial y 3 millones para apoyo en general a la búsqueda de la paz. De los 519,2 millones de dólares para asistencia militar se contemplan 328 millones para los helicópteros, 208 millones para los 16 Black Hawk con destino al ejército y 120 millones para los Huey.

3. En el año 2000, 38.320 muertes violentas. Un incremento de 7% respecto a 1999.

4. En el año 2000, 3.162 secuestros de los cuales unos 1.000 son realizados por la delincuencia común y el resto por las organizaciones guerrilleras. Con frecuencia, éstas encargan los secuestros a la delincuencia común o le “compran” a ésta los secuestrados.

La tasa total de secuestros sobrepasa ya los 3.000 al año y es la más alta del mundo⁴. Pandillas juveniles fuertemente armadas rodean las grandes ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. Unas ejercen control territorial; otras se dedican al delito común; mientras otras más son milicias guerrilleras o paramilitares. Al desarrollo de este clima delictivo contribuyó decisivamente el narcotráfico en los años 80.

En medio de la decadencia del sistema político bipartidista desde finales del Frente Nacional (1958-1974) y de las dificultades del modelo económico vigente, encontró su nicho en Colombia, desde los años 70, el narcotráfico. En la primera década sus promotores acumularon riqueza y poder. En los 80 se enfrentaron al Estado y mediante la dialéctica de terror y corrupción minaron sus bastiones judiciales y policiales. Y en la primera mitad de los 90, penetraron masivamente con sus dineros a los partidos y el Congreso hasta el punto de financiar buena parte de una campaña presidencial en 1994. Bajo presión interna y estadounidense, los gobiernos de la década destruyeron las mayores organizaciones de narcotraficantes, lo que, sin embargo, no logró reducir el negocio. Un amplio número de pequeñas organizaciones sustituyó a las anteriores, convirtieron a Colombia en el principal productor de hoja de coca, implantaron la amapola y dejaron buena parte del riesgoso transporte de la droga a EEUU en manos de los mexicanos. Entre tanto, las FARC, las AUC y un sector del ELN se transformaron en protectores a sueldo y ocasionales propietarios de cultivos y laboratorios ilegales destinados a financiar la guerra. Incluso, según recientes declaraciones de funcionarios estadounidenses y de algunas autoridades colombianas, las FARC estarían además implicadas en la exportación de cocaína. De confirmarse esta apreciación aún no suficientemente comprobada, el proceso de paz daría paso a la guerra sin cuartel.

Entre tanto, parte importante de la clase política continúa entretenida en el festín de los recursos públicos. Según el Departamento Nacional de Planeación la corrupción le cuesta al país unos 580 millones de dólares cada año. Desde finales de la alianza bipartidista en los años 70, los políticos han aprovechado su posición, inicialmente, para aceitar la maquinaria electoral mediante un clientelismo mercantil y luego, desde los años 90, también para el enriquecimiento personal. De la corrupción pública, agudizada por el narcotráfico, reciben el delito y la violencia sus mejores estímulos y argumentos.

Conflicto armado, narcotráfico y corrupción han profundizado la crisis de hegemonía política ya en ciernes desde fines del Frente Nacional. Aunque esa alianza bipartidista puso fin a la violencia de los años 50 entre liberales y conservadores, eliminó también la competencia política y favoreció la corrupción. Los dos partidos se convirtieron, en buena medida, en asociaciones de empresarios electorales y burocráticos que comparten una misma razón social en beneficio privado. Los electores perdieron la confianza en sus representantes. La Constitución de 1991, que pretendía depurar las reglas del juego político, restaurar la legitimidad del Estado y consolidar la paz, abortó su propósito pacificador al dejar por fuera a las FARC, al ELN y a los mismos militares, y aunque en las

normas pretendió eliminar el sistema político clientelista y corrupto, no podía cambiar por sí sola sus prácticas.

El debilitamiento de los partidos tradicionales no ha significado el fortalecimiento paralelo de terceras fuerzas. Los movimientos de oposición o revolucionarios no han logrado unirse ni presentar un proyecto convincente de nación. En consecuencia, son los partidos políticos como tales y su representación en los cuerpos legislativos los que han caído en el desprestigio. El país ha quedado entonces a la deriva.

A cambio de partidos, desde la década de los años 80 vienen surgiendo presuntos movimientos suprapartidistas o antipolíticos, a la vez que crece el voto por personalidades mediáticas que se candidatean para puestos de gobierno. Avanza de este modo la individualización de la política en la cabeza de figuras de las cuales se espera una salvación milagrosa y a quienes se termina rechazando con desencanto. Es así como esta evolución representa una caja de sorpresas y crea un terreno propicio para gobiernos civiles personalistas y autoritarios. No parece previsible, en cambio, el surgimiento de gobiernos militares a los que los colombianos han sido reacios.

Hasta mediados de los años 90 el cúmulo de circunstancias negativas no había impedido el progreso económico en Colombia, paradoja que dio durante muchos años sustento al adagio: “el país va mal, pero la economía va bien”. Pero la acumulación de anomalías, sumada al agotamiento del modelo económico de sustitución de importaciones, la improvisada imposición de la apertura desde comienzos de los 90, la persistente revaluación de la tasa de cambio y el incremento de las tasas de interés, el creciente déficit fiscal, la caída de los precios del café y las dificultades de las economías vecinas acabaron por sumir a la economía colombiana, a partir de 1996, en un franco deterioro. Tras un buen crecimiento a comienzos de la década –no basado en las exportaciones sino en el auge de la construcción y del consumo suntuario, muy ligados a los dineros del narcotráfico– la economía se vino abajo. El país entró en recesión desde el segundo semestre de 1998 y el crecimiento fue negativo en 1999⁵. En las grandes ciudades el desempleo abierto pasó de una tasa de 12,5% en septiembre de 1996 a 20,1% tres años después. Pero en el campo el desempleo es mucho mayor, lo que, dicho sea de paso, ha favorecido la expansión de los cultivos ilegales y de todos los aparatos armados ilegales, que cumplen una función, entre otras, de bolsas de empleo.

Desde 2000, la actividad económica ha mostrado una leve recuperación, gracias sobre todo al sector externo. La devaluación del peso y el alza de los precios internacionales del petróleo favorecieron las exportaciones, sobre todo hacia EEUU, Venezuela y Ecuador. Pero a los desequilibrios estructurales –como el déficit fiscal⁶, la

5. El crecimiento fue de -3,6%.

6. El déficit alcanzó -4.3% del PIB para todo el sector público.

deuda⁷ y el desempleo⁸— no se les ve aún solución. El severo ajuste fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional avanza con dificultades. En el futuro inmediato la suerte de la economía depende en buena medida de la evolución del conflicto armado. Y queda de todos modos pendiente el problema de fondo para la inserción exitosa del país en los mercados internacionales: la competitividad de su economía. Hasta hoy, Colombia, como las demás naciones de la región andina, parece no tener un lugar claro en una economía global basada en el conocimiento.

Con todo, como señala Jenkins:

...las instituciones democráticas (de Colombia) siguen intactas; la nueva Constitución descentraliza el poder e incluye más gente en el proceso político que nunca antes. El nivel de alfabetización es uno de los más altos de América Latina, mientras sus cuarenta universidades siguen llenas. Un número impresionante de mujeres toma parte en la educación superior y trabajan en el servicio público. Los empresarios colombianos son emprendedores y competitivos. Colombia tiene la cuarta economía más grande en América Latina y es el único país en la región que nunca ha dejado de honrar sus deudas. Parecerían existir dos Colombias: una sofisticada Milán suramericana ligada a un brutal Congo de América del Sur.

Factores de la situación actual y futura

Los escenarios que presentamos más adelante están condicionados por cuatro factores principales, dos nacionales y otros dos internacionales. Los dos factores nacionales son el conflicto armado interno y el narcotráfico, mientras que los internacionales tienen que ver, por una parte, con la política de EEUU frente a las drogas y, por otra, con la evolución de varios países andinos, en particular la Venezuela de Chávez y su compleja relación con Colombia y EEUU.

1. La evolución del *conflicto armado interno* parece constituir el factor del que dependen, en gran medida, todas las demás variables. Sus dos cursos posibles en esta década, hacia una salida negociada o hacia la guerra declarada, le abren camino a dos escenarios casi opuestos. Una solución negociada del conflicto, aunque no remediaría todos los problemas que afronta Colombia, sí le devolvería la paz política y mejoraría la seguridad general; permitiría disminuir los cultivos ilegales y el narcotráfico; estimularía la reactivación de la economía; comenzaría a mitigar los desequilibrios sociales y fortalecería la acción colectiva; traería consigo una reforma de las instituciones políticas, así como alguna depuración de sus prácticas; mejoraría la inserción de Colombia en el mundo y permitiría reanimar a la Comunidad Andina. En cambio, un retorno a la guerra sin cuartel traería muy probablemente los efectos contrarios, al

7. A comienzos de 2001 la deuda externa total era de 33.099 millones de dólares, distribuidos así: 19.794 millones correspondientes al sector público y 13.305 al privado. El servicio de la deuda representa 8,7% del PIB.

8. El 12% del desempleo es de carácter estructural.

menos en esta década. En el actual contexto del conflicto, en-marcado por el Plan Colombia, el escenario de paz negociada podría ser considerado como un triunfo del Plan. La prolongación de la guerra implicaría, por el contrario, su rotundo fracaso.

2. El segundo factor decisivo en la situación colombiana es la *producción y exportación de drogas ilegales*. Los dineros generados por las drogas ilegales someten a su poder e influencia las costumbres, normas e instituciones, estimulan la violencia y alimentan el conflicto armado. Hay que anotar que el narcotráfico ha dejado de ser un factor independiente del conflicto armado, tanto por sus vínculos reales con él, como porque el Plan Colombia los une hacia adelante indisolublemente.

Con todo, sin desconocer la vinculación entre narcotráfico y conflicto, sería sin embargo posible imaginar otras formas de combate contra las drogas tal vez más eficaces que las que se formulan en el Plan Colombia. De hecho, sin dejar de lado el fortalecimiento de la fuerza estatal, el Plan inicialmente diseñado por el gobierno colombiano consistía en desarrollar vastos programas sociales en las zonas de cultivos ilegales y con los desplazados por la violencia en todo el país. Propuestas similares son ahora promovidas por las organizaciones colombianas por la paz, algunos países europeos⁹ y ciertos sectores estadounidenses¹⁰. A los programas sociales se podría añadir, además, un decidido apoyo a la economía legal de Colombia por parte de los países industrializados, mediante créditos blandos, preferencias arancelarias para sus productos e inversión directa no especulativa, lo que, sin embargo, no parece estar presente ni en el Plan aprobado por EEUU ni en las propuestas de ayuda europea. Esta versión más social y menos militar del Plan podría tener los mismos efectos de disminución del narcotráfico y de recursos para las organizaciones armadas ilegales, sin agudizar el conflicto. Al contrario, haría posible la paz negociada. Huelga decir, además, que una legalización controlada de las drogas sería probablemente mucho más eficaz para la reducción de la producción de drogas y la solución del conflicto colombiano que cualquier política represiva, así sea blanda como la que acabamos de describir.

Los dos factores enunciados –curso del conflicto armado y forma de lucha contra el narcotráfico– parecen constituir los vectores decisivos de la evolución de Colombia en la década que comienza. Pero otros dos eventos, estos internacionales, podrían cambiar de manera fundamental el curso de los acontecimientos en Colombia durante estos años. Ambos se enmarcan dentro del escenario de guerra, del que constituyen más bien derivaciones, y ambos suponen el fracaso del Plan Colombia en su versión actual.

3. El primer evento internacional que cambiaría el curso de los acontecimientos sería el agravamiento de la situación del mundo andino, actualmente sumido en

9. Como Bélgica, Suecia, Noruega, Francia, Holanda y Alemania.

10. Organizaciones de derechos humanos como Washington Office on Latin America (WOLA) y Human Rights Watch, y algunos congresistas demócratas como los senadores Patrick Leahy (Vermont) y Paul Wellstone (Minnesota) y los representantes David Obey (Wisconsin) y Nancy Pelosi (California).

crisis económicas de distinto grado, convulsiones sociales y graves problemas de gobernabilidad. Las crisis de los distintos países, que parecen de larga duración, tienen mutua incidencia entre países vecinos así como en la integración andina y sudamericana (Ramírez). Pero la situación que, en este contexto, más afectaría la problemática colombiana es, sin duda, una *aguda polarización interna de Venezuela*, que Chávez podría intentar desviar hacia un nacionalismo exacerbado, el enfrentamiento con Colombia, el apoyo a las FARC y la radicalización de su discurso antinorteamericano. Esta situación, que podría ser vista por EEUU como una amenaza a la estabilidad de toda la región y a su propia seguridad, se constituiría quizás en un reto mayor para Washington. En tal caso el conflicto colombiano quedaría subordinado a otro mayor, de carácter internacional, con eje en Caracas.

4. El segundo evento internacional sería un *cambio en la política de Washington frente a las drogas* hacia fines de la década. La evidencia del fracaso del Plan Colombia y la conciencia de haber dilapidado millones de dólares en una guerra inútil podría mover a contribuyentes, congresistas y el gobierno de EEUU a replantear, hacia fines de la década, su política contra las drogas. Una legalización parcial y controlada de las mismas y un nuevo énfasis de la lucha estadounidense en la educación y la salud domésticas, haría bajar rápidamente los precios de esas sustancias, disminuiría su rentabilidad, desestimularía los cultivos ilegales y reduciría sustancialmente la principal fuente de ilegalidad, corrupción y violencia en Colombia. El país podría poner fin al conflicto armado y comenzar a reconstruir la sociedad, la economía y el Estado sobre nuevas bases. Esta eventualidad, aunque poco previsible hasta hoy, no se puede descartar por completo.

Parece probable que los cuatro factores antes enunciados decidan la suerte de Colombia en los próximos 10 años. No parece, en cambio, que, sin haber obtenido alguna solución del conflicto armado y una disminución significativa del tráfico de drogas, sea posible llevar a cabo una seria renovación de la economía, de las relaciones sociales, de las instituciones políticas o de las relaciones internacionales de Colombia, o que una modificación en alguno de estos campos –si ella fuera posible– pudiera cambiar el curso del conflicto armado y el narcotráfico. Por ello, ninguna de estas variables (economía, sociedad, instituciones políticas, relaciones internacionales) puede ser considerada como un factor de la evolución colombiana en la presente década. Pero, al mismo tiempo, hay que decir que mientras no se introduzcan serias reformas en el ordenamiento social y el modelo económico y no se transforme el sistema político, no será posible hallar una solución estable para los problemas del narcotráfico y la violencia.

Escenarios posibles

A continuación presentamos cuatro escenarios de la probable evolución de Colombia durante la primera década del siglo. Para facilitar su lectura, lo hacemos a modo de relatos que hubieran sido escritos en el año 2010.

Guerra endémica

Mirados hacia atrás, estos 10 años han significado una dantesca tragedia humanitaria. En 2001 comenzó la implementación del Plan Colombia tal como había sido inicialmente aprobado por Washington: fumigación de grandes cultivos ilegales en el sur del país con el apoyo de tres batallones antinarcóticos. Hacia finales del año, los batallones entraron en combate con las FARC y con muchos cultivadores, recolectores y trabajadores de laboratorios a quienes éstas habían distribuido armas. El año terminó en una guerra abierta en el sur, que se prolongó durante 2002. Pero se mostró más difícil de lo esperado por el Gobierno. Las FARC bloquearon durante meses los departamentos de Putumayo y Caquetá, y se desplazaron de nuevo hacia el centro y norte del país. Ante la presión nacional, a mediados de 2002, el Gobierno rompió las conversaciones con esa organización.

El gobierno de Bush decidió entonces endurecer su posición. Con el argumento de que las FARC se habían convertido en cártel del narcotráfico, su gobierno decidió apoyar abiertamente el ataque masivo del ejército colombiano a un objetivo claro: las FARC en el sur del país. De 2002 a 2005, con la entrada en operación de todos los helicópteros y nuevos batallones antinarcóticos, el incremento de soldados profesionales, la mejora de la inteligencia, la aplicación de tecnología militar más moderna y el incremento geométrico de las autodefensas, las FARC recibieron severos golpes. El grueso de sus tropas se replegó y se dispersó en las selvas mientras sus milicias urbanas desataban el terrorismo en las grandes ciudades, sobre todo en Medellín y Bogotá. Mediante golpes sorpresivos destruyeron buena parte de la infraestructura energética y el país sufrió severos racionamientos de energía. Guerra de guerrillas y terrorismo urbano continuaron en los años siguientes.

Hacia 2008, muerto “Tirofijo” a sus 81 años, las FARC se dividieron entre una minoría de antiguos dirigentes dispuestos a negociar y una mayoría dirigida por la nueva generación de comandantes decididos a continuar la guerra. Muchos guerrilleros desertaron y unos pocos frentes se fueron desmovilizando, pero la mayor parte de la organización, liderada por el “Mono Jojoy”, continuó realizando ataques en el campo y la ciudad. Al mismo tiempo, fortaleció sus nexos con las mafias internacionales de drogas, armas y mercenarios. En 2010, los asesores estadounidenses ya sobrepasan los 2.000. Pero, a estas alturas, el conflicto parece haberse vuelto endémico. Sólo el ELN, acosado por militares y paramilitares, había firmado la paz ya en 2003, pero muchos de sus frentes pasaron entonces a las filas de las FARC.

En medio del caos generado por la guerra, el narcotráfico ha aumentado. Los cultivos se desplazaron más adentro en la Amazonía colombiana y penetraron, junto con las FARC y los paramilitares, en las selvas de Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, contribuyendo a desestabilizar la región andina y el Darién panameño.

Instituciones políticas. Ya en las elecciones de 2002, ante la ruptura de las conversaciones de paz triunfaron las propuestas de mano dura. Recibieron el apoyo

de terratenientes y ganaderos, de grandes grupos económicos, de muchos colombianos cansados de la guerrilla, y, desde luego, de los militares. Gobiernos autoritarios se entronizaron desde entonces hasta hoy. Los partidos tradicionales les brindaron también su apoyo, aunque reducidos a una existencia meramente formal.

Las fuerzas militares recibieron, desde comienzos de 2003, amplios poderes legales. A despecho de la comunidad internacional pueden allanar, detener y juzgar sin control civil. Los movimientos y partidos realmente independientes, convertidos en blanco de la represión, desaparecieron. Y ante las urgencias de la guerra, la reforma de las costumbres políticas quedó aplazada. El clientelismo y la corrupción siguen carcomiendo al Estado. El autoritarismo gubernamental, lejos de subsanar la crisis de hegemonía política, la ha ocultado transitoriamente y ha contribuido a profundizarla.

Economía. En los primeros años, el Plan Colombia tuvo efectos contradictorios sobre la economía. La ruptura de conversaciones con las FARC le dio un nuevo impulso al éxodo de colombianos, la fuga masiva de capitales y la devaluación del peso. El crecimiento fue nulo en 2003. Pero luego, las medidas drásticas adoptadas por el nuevo gobierno, el apoyo decidido de Washington, la firma de la paz con el ELN en 2003 y los golpes asestados a las FARC de 2002 a 2005, suscitaron alguna recuperación de la economía. La devaluación continuó promoviendo las exportaciones (petróleo, café, textiles, confecciones, cuero, calzado, alimentos agroindustriales, químicos, cemento y hasta automóviles). Animados por la mano dura, retornaron algunos capitales nacionales e internacionales a sectores estratégicos de rápido retorno, y la economía volvió a crecer por un par de años a ritmos de 3 y 4%.

Pero, finalmente, el terrorismo urbano, la resistencia de las FARC y la permanencia del conflicto minaron la economía a partir de 2006. El país entró de nuevo en recesión. El alto déficit fiscal estimulado por la guerra, la carga de la deuda, las malas calificaciones de las agencias internacionales y la falta de confianza en el país provocaron una crisis cambiaria mayor. Desde entonces hasta hoy, en 2010, el crecimiento anual ha sido negativo. El escaso ahorro nacional se refugia en EEUU.

Sociedad. Aunque la economía tuvo un modesto crecimiento hasta 2005, el desempleo siguió aumentando. Ahora se acerca a 30%. La agudización de la guerra indujo desplazamientos cada vez mayores del campo a la ciudad. Unos cuatro millones de colombianos se agolpan sin empleo en torno de las grandes ciudades. La miseria y la inseguridad urbanas son dramáticas. Los secuestros alcanzan ya los 4.000 por año. Crece también el empobrecimiento de las clases medias. La pequeña y mediana empresa ha desaparecido casi por completo. Los grandes grupos económicos nacionales, aliados a firmas transnacionales, acaparan la escasa riqueza nacional. Con el incremento de la represión, las organizaciones sociales también desaparecieron. El movimiento ciudadano por la paz, muy activo a comienzos de la década, fue impotente ante la represión y los asesinatos selectivos, y se vio obligado a replegarse. No hay espacio para el debate público. Los colombianos han opta-

do por encerrarse en sus casas y en el círculo de su familia y sus amistades más cercanas. Reina un total pesimismo sobre el futuro.

Relaciones internacionales. Ante la prolongación de la guerra Washington optó, desde 2005, por convertir el sur del país en un campo de experimentación de nuevas tecnologías militares y por apoyar a los países vecinos para contener el conflicto dentro de las fronteras colombianas.

España, Suiza, Noruega, Francia y Cuba colaboraron activamente en el logro de los acuerdos con el ELN. Pero ante la adopción del Plan Colombia sin modificaciones, la Unión Europea (UE) optó, desde 2003, por limitar su ayuda a la donación de recursos para los desplazados y los ex-guerrilleros y por apoyar las escasas ONGs de derechos humanos que han sobrevivido.

La agudización de la guerra incrementó las incursiones guerrilleras y paramilitares hacia Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, así como los lazos de los actores armados colombianos con sectores sociales subalternos de esas naciones. Así mismo, cultivos y laboratorios de drogas se desplazaron hacia esos países y se intensificó el contrabando de armas por las fronteras, que son ahora tierra de nadie.

Con Venezuela las relaciones se han deteriorado, llegando a momentos de aguda tensión. La aplicación del Plan Colombia continuó suscitando las críticas de Chávez y reacciones cada vez más duras del gobierno colombiano. Las comisiones binacionales, que habían sido revitalizadas en 2001, dejaron de funcionar desde 2002. El comercio ha decaído a los niveles de los años 80. Los problemas en la frontera han provocado ocasionales escaramuzas entre las fuerzas militares de ambos países.

Con la agudización de las tensiones entre sus dos miembros principales, la Comunidad Andina ha sido incapaz de diseñar una estrategia de seguridad conjunta frente a la crítica situación de la región. Fuera de las declaraciones del consejo presidencial andino de “amplio respaldo a los esfuerzos de paz que está desarrollando el gobierno de Colombia”, han primado durante toda la década las denuncias y las reacciones individuales y defensivas. No ha surgido nada parecido al Grupo Contadora de los años 80. De este modo, toda la iniciativa ha quedado en manos de Washington. Estados Unidos ha logrado convertir a Colombia en amenaza a la seguridad regional, ha reforzado el énfasis antidrogas y militar del Plan Colombia y ha estimulado una creciente militarización andina y amazónica, que sirve de cordón sanitario de los vecinos frente al conflicto colombiano (Ramírez). De este modo, Washington aprovecha la crisis andina para ampliar su “patio trasero” hasta los Andes y para controlar buena parte de la Amazonia. Colombia aparece como el escenario de una insoluble tragedia humanitaria. La comunidad internacional y la banca multilateral han abandonado el país a su suerte.

Hoy, en 2010, cansados de una guerra sin futuro, los colombianos vuelven a clamar por la paz. La campaña para las elecciones de agosto estuvo centrada en el tema y le dio el triunfo a la tendencia que prometía negociación con mayor credibilidad. Así pues, el país ha vuelto al punto de partida de 1998, aunque con mucha

más sangre derramada, más odios acumulados, una economía destruida por la guerra y una dependencia casi completa de EEUU, que la utiliza como arena de ensayos militares. Tras haber demostrado su capacidad de resistencia, las FARC se muestran ahora mucho más arrogantes ante una eventual negociación.

Paz negociada

Durante 2001, las organizaciones colombianas por la paz, la asociación de gobernadores del sur del país, casi todos los países europeos, las ONGs de derechos humanos de EEUU y numerosos congresistas demócratas, ahora en la oposición, ejercieron presiones para que se modificara el Plan Colombia en un sentido más social. El nuevo gobierno de Bush, más preocupado por su legitimidad interna que por los problemas de Colombia, accedió a ello, dejando algún margen de maniobra al gobierno colombiano en la aplicación del Plan. Esto le permitió a Pastrana utilizar las dos versiones del mismo como garrote y zanahoria frente a la guerrilla.

En el primer semestre de 2001, ante la inminencia de la aplicación del Plan Colombia en su versión militar, recrudeció la guerra. Las conversaciones con las FARC estuvieron varias veces a punto de romperse. Pero la intervención de organizaciones colombianas por la paz, la movilización ciudadana contra la guerra y la presión de la comunidad internacional (la UE, la Organización de las Naciones Unidas, EEUU y México) lograron mantener vivo el diálogo. En el segundo semestre, tanto la presión nacional e internacional como el aumento de la presión militar del Estado permitieron algunos avances con el ELN y con las mismas FARC en materia de derecho internacional humanitario. El ELN aceptó devolver a los secuestrados y renunciar al secuestro a cambio de financiación durante un año para sus hombres. Las FARC dejaron en libertad a los policías y soldados detenidos y, a cambio, el Gobierno liberó a los guerrilleros enfermos o no condenados. Estos avances le devolvieron alguna credibilidad a los esfuerzos de paz emprendidos por Pastrana.

Gracias a la renuncia al secuestro por parte del ELN, las AUC accedieron finalmente a que el presidente le concediera a la organización insurgente, a finales de 2001, una zona de despeje en el centro del país, sometida a reglas claras y veeduría nacional e internacional. Allí se adelantó, desde fines de ese año y durante el primer semestre de 2002, la Convención Nacional solicitada por el ELN. En 2003, el nuevo Gobierno logró llegar a un acuerdo de paz con esa organización. Entre sus condiciones estaba la celebración de una nueva Asamblea Constituyente, en la que se debatiera, entre otros temas, el de los recursos energéticos.

A su vez, ante la posibilidad de reorientar los recursos del Plan Colombia hacia el campo social, y teniendo en cuenta el incremento de la presión militar y el avance de las negociaciones con el ELN, las FARC comenzaron a negociar en serio a finales de 2002. En 2004 se llegó finalmente a un primer acuerdo tentativo. Manteniendo la democracia representativa y el libre mercado, se convinieron importantes reformas económicas, sociales y políticas, que serían sometidas a la Constituyente en 2005. Las FARC lanzaron su Movimiento Bolivariano a la luz pública manteniendo

las armas para su defensa. Todavía las conservan, lo que no permite aún garantizar una paz estable.

Una vez concluidos los acuerdos con las FARC, se pudo llegar también a un arreglo con las AUC. Sus miembros se podrían someter a la justicia y obtener rebaja de penas previa confesión de sus delitos. Muchos de ellos se entregaron y recibieron penas menores, aunque otros muchos se dedicaron a la delincuencia común. Persiste todavía un fuerte núcleo que sólo estaría dispuesto a entregar las armas cuando lo hagan las FARC. Éste es un punto difícil de resolver.

Concluidos los acuerdos, la seguridad y tranquilidad comenzaron a mejorar en todo el país. Terminaron los ataques a los pueblos y a la infraestructura energética y los bloqueos a las carreteras nacionales. Sin embargo, la delincuencia se ha incrementado notablemente. Aunque el número de asesinatos, secuestros, robos y extorsiones ha descendido, siguen siendo abundantes y son realizados por bandas bien organizadas de delincuentes comunes, ex-guerrilleros y antiguos paramilitares.

Mediante erradicación manual y sustitución de cultivos, el Plan Colombia logró disminuir sustancialmente los cultivos ilegales en Colombia, pero muchos se desplazaron a los países vecinos, sobre todo a Ecuador, Panamá y Venezuela, haciendo que el narcotráfico proveniente de Sudamérica no disminuya significativamente. Con todo, se considera un éxito que no esté ya protegido por fuertes organizaciones armadas.

Instituciones políticas. Los incipientes logros del proceso de paz en 2001 revirtieron la creciente inclinación de los colombianos hacia la mano dura y le abrieron paso al triunfo de una posición más flexible en las elecciones presidenciales de 2002. El nuevo Gobierno logró renegociar con las FARC las condiciones de la zona de despeje, darle a las negociaciones un ritmo consistente, firmar la paz con el ELN en 2003, y con las FARC y una parte de las AUC en 2004.

Con el nuevo Gobierno, se crearon espacios para la participación de nuevos sectores sociales y políticos en el Estado. Ingresó a la burocracia una nueva generación de jóvenes, hombres y mujeres, bien preparados, más modernos y democráticos, y no contaminados por el clientelismo y la corrupción. No pocos venían de desempeñar cargos importantes en las alcaldías de las grandes ciudades.

A su vez, los movimientos de centroizquierda que se habían comenzado a gestar desde fines de los años 90, se unieron por fin a mediados de la década, y en 2006 se aliaron al Movimiento Bolivariano de las FARC con miras a las elecciones, aunque sus votos no llegaron al millón. En esa ocasión triunfó un ex-alcalde de Bogotá. Ha surgido también un movimiento de centroderecha conformado por antiguos liberales y conservadores, por ex-militares y antiguos paramilitares, numerosos terratenientes y algunos empresarios, por familias que fueron víctimas de la guerrilla y por mucha gente de todos los sectores sociales.

Esta nueva alineación bipolar y la consiguiente agudización de la lucha política ha ido disolviendo los partidos tradicionales. Sin embargo, reducidos núcleos aún se reivindicán como conservadores mientras los liberales se dividieron entre

un ala de derecha, que entró a formar parte de la nueva corriente, y otra vertiente atraída por la centroizquierda.

Los acuerdos de 2004 y la Constitución de 2005 introdujeron importantes cambios en el Estado. Éste es ahora más intervencionista en sectores estratégicos de la economía; goza de mayor autonomía administrativa y política en las regiones, departamentos y municipios; y se ha hecho más participativo en virtud de la regulación efectiva de las formas de participación popular ya previstas por la Constitución del 91. Se introdujo así mismo una profunda reforma al sistema político, que incluye, entre otras cosas, una reducción del tamaño del Congreso, una reestructuración de los partidos y del sistema electoral, la multiplicación de inhabilidades para los congresistas, el escrutinio permanente de sus miembros y la obligación de rendir periódicamente cuentas públicas de su gestión.

Economía. Desde 2000 la economía había comenzado a recuperarse lentamente, a un ritmo promedio de 3% anual, favorecida por los altos precios internacionales del petróleo y la caída del valor del peso, que estimuló las exportaciones, sobre todo hacia EEUU y Venezuela. El desempleo, sin embargo, continuaba siendo muy alto, cercano a 20%.

Desde 2005 hasta 2007, tras el logro de los acuerdos de paz, el crecimiento alcanzó índices de 5% y 6%. Muchos elementos contribuyeron a ello. El restablecimiento de la paz y una mayor seguridad estimularon el retorno de capitales y la inversión productiva. La ayuda internacional, sobre todo de la UE y de algunos de sus países miembros en particular, permitió la reconstrucción de la infraestructura energética y la construcción de vías de penetración hacia regiones antes aisladas y dedicadas a cultivos ilegales; favoreció el retorno de desplazados a sus tierras y el inicio de proyectos agropecuarios comunitarios; se iniciaron también proyectos de sustitución de cultivos en vastas regiones del sur, con mercados garantizados. Más importante aún, la UE prolongó nuevamente el sistema preferencial generalizado para las exportaciones de los países andinos (SPG-andino), envió a Colombia una misión con el fin de ayudar a los empresarios a aprovechar las ventajas del sistema y otra destinada a estimular el empleo. Para esto último viene apoyando la modernización del Servicio Nacional de Aprendizaje mediante la formación de jóvenes en oficios tradicionales (carniceros, plomeros, carpinteros, mecánicos, etc.) y en nuevas tecnologías, sobre todo de acuerdo a la demanda de las antiguas zonas de guerra. Así mismo, EEUU prolongó y amplió el acuerdo de referencias arancelarias para numerosos productos colombianos, incluidos textiles, confecciones, cuero y azúcar. La entrada en vigencia inicial del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2005, aunque limitada en algunos sectores por los acuerdos de paz, ha favorecido al consumidor, mientras la industria nacional se ha orientado más a la exportación. Y la banca multilateral, en particular el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, aceptaron una reestructuración de la deuda pública y otorgaron al país nuevos créditos blandos y de largo plazo para el desarrollo de empresas micro, pequeñas y medianas.

Tras la firma de los acuerdos volvieron los agricultores y ganaderos a sus tierras y se reactivó la producción en los campos. El café colombiano, desplazado por el vietnamita en los mercados internacionales, se reorientó hacia la producción de granos de alta calidad. La producción petrolera se reactivó a partir de 2006 gracias a los nuevos contratos y exploraciones emprendidas desde 2000. Los precios internacionales del carbón experimentaron también una bonanza que palió la caída de los ingresos del café. Por otra parte, desde fines de los años 90, los grandes grupos económicos y algunos sectores estratégicos, como el financiero y el de comunicaciones, venían avanzando en su consolidación, estableciendo alianzas con firmas transnacionales y extendiendo su presencia a otros países. En fin, el término mismo de la guerra infundió un nuevo dinamismo en la actividad productiva.

Sin embargo, a partir de 2008, pasada la primera afluencia de capitales e inicia-tivas, el crecimiento económico se ha estabilizado entre 3 y 4% anual. Siguen pe-sando sobre la economía el déficit fiscal, generado por el incremento de la inver-sión social y la descentralización, producto de los acuerdos de paz; la deuda tanto interna como externa; el desempleo aún alto (alrededor de 17%), y una competi-tividad todavía muy escasa de la economía.

Los acuerdos y la Constituyente de 2005 impulsieron el retorno a una apertura comercial gradual y selectiva, y prohibieron la privatización de empresas energé-ticas y de comunicaciones. Esto le ha creado dificultades a Colombia en el ALCA y ha frenado el ritmo de las inversiones y el crecimiento. Pero en estos mismos sectores estratégicos han comenzado a crearse empresas privadas que compiten con las esta-tales. Producto también de los acuerdos, el Estado ha incrementado notablemente la inversión en salud y educación, y ha retomado el ritmo de las transferencias a departa-mentos y municipios, reducidas en 2001 en virtud del ajuste fiscal. Por otra parte, con las tierras de los narcotraficantes (casi cuatro millones de hectáreas) y las propie-dades rurales improductivas se viene adelantando desde 2006 una acelerada refor-ma agraria, sobre todo en las antiguas zonas de conflicto, y se impulsan proyectos comunitarios de producción. Se cuenta para ello con los créditos blandos de la banca multilateral y de algunos países de la UE. Así mismo, en alianza con firmas españolas, se viene adelantando un gran proyecto de turismo ecológico en algunos parques naturales. Antiguos guerrilleros sirven de guías, guardabosques o vigilantes, y han desarrollado pequeñas empresas de servicios al turista.

Sociedad. Como ya lo señalamos, la movilización ciudadana, las organizacio-nes por la paz y los derechos humanos y la intervención de los gobernadores del sur de Colombia jugaron un papel decisivo en la modificación del Plan Colombia en un sentido más social y en el logro de la paz negociada.

Una vez firmados los acuerdos, y gracias a los proyectos de reconstrucción apoyados por la UE, a la reforma agraria y al incremento de la inversión social, la desigualdad ha disminuido. Pero, más que el cambio real, es la percepción de la tranquilidad recuperada y de la preocupación del Estado por los más débiles la que ha creado un clima de paz social. Además, los sindicatos más fuertes,

ligados al sector estatal, que ya habían quedado debilitados por el ajuste de 2001, siguen perdiendo poder en la medida en que las empresas públicas se hacen menos competitivas frente a las nuevas empresas privadas. Se han multiplicado, en cambio, las ONGs y las asociaciones ciudadanas dedicadas a la rehabilitación, la convivencia y la participación democrática, que han recibido el apoyo de la UE y de la banca multilateral.

Relaciones internacionales. La política de EEUU hacia Colombia sigue centrada en la lucha antidrogas, pero, desde la discusión del Plan Colombia, se ha abierto a otros temas. Inicialmente, hasta los acuerdos de 2004, se preocupó también por la solución del conflicto armado. Posteriormente, comenzó a interesarse más en temas de comercio, ampliando la vigencia de las preferencias arancelarias para los países andinos, que priman sobre el ALCA. Pero el tema de la lucha antidrogas, la fumigación aérea y la extradición, nuevamente prohibida por la Constitución de 2005, es fuente de tensiones permanentes entre ambas naciones.

La participación de la UE en el proceso de paz y luego en la reconstrucción nacional ha sido decisiva. De no haber sido por sus presiones tal vez no habría sido posible redimensionar el Plan Colombia y alcanzar la paz. Ahora Europa apoya la reubicación de los desplazados, la rehabilitación de las víctimas de la guerra y de los ex-combatientes, así como algunos programas de pequeñas y medianas empresas. Ha estado presente también, como ya lo dijimos, en la reconstrucción de la infraestructura. La socialdemocracia europea apoya a los movimientos y partidos de centroizquierda. En el terreno comercial, en cambio, la UE se muestra renuente a conceder preferencias.

Las relaciones con Venezuela han mejorado desde que se reorientó el Plan Colombia en un sentido más social y sobre todo desde 2004, tras la firma de la paz con las FARC. Chávez no oculta su simpatía y respaldo al Movimiento Bolivariano de esa organización. El comercio entre ambos países sigue creciendo con superávit para Colombia, gracias a la revaluación del bolívar y la devaluación del peso.

Por su parte, con el liderazgo de México, el apoyo de Venezuela y el beneplácito de Washington, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) había creado ya desde 2003 un grupo de apoyo a los esfuerzos de Colombia por el logro de la paz. Desde entonces concertaron su acción con el gobierno colombiano. Y tanto el acuerdo negociado del conflicto como la normalización de las relaciones con Venezuela han reanimado a toda la Comunidad, fortaleciendo sus intercambios comerciales y dándole mayor estabilidad. Así mismo, han permitido una mejor relación CAN-Mercado Común del Sur.

Desplazamiento e internacionalización del conflicto

En este escenario la evolución interna de Colombia es, hasta mediados de la década, la misma del escenario de “guerra endémica”. Supone, pues, la aplicación del Plan Colombia con un énfasis militar y la intensificación de la guerra. Pero, por

un factor externo a Colombia, el conflicto acaba internacionalizándose y su centro de gravedad se desplaza fuera del país.

Todo empezó a mediados de 2002. En los inicios del año comenzaron a declinar los precios internacionales del petróleo. El estancamiento de las economías más avanzadas, inducido en parte por los altos precios del crudo, disminuyó su demanda e hizo caer los precios. Pasada la bonanza, la economía venezolana dejó primero de crecer, y luego, en 2003, entró de nuevo en una recesión aún más aguda, puesto que los ingresos del petróleo, la alta capacidad adquisitiva del bolívar y las importaciones crecientes habían asfixiado buena parte de la producción nacional. En 2003 se disparó el desempleo que había disminuido hasta 17%, y llegó en 2004 a 25%. La desigualdad social tampoco ha cedido.

La crisis económica y social de 2004 suscitó el descontento popular y agudizó la oposición de las elites al Gobierno y la polarización de la sociedad. Se comenzó a hablar entonces de corrupción, nepotismo y autoritarismo en el Gobierno. Las protestas sociales trajeron a la memoria el "Caracazo". Hacia fines del año aparecieron brotes de insubordinación en sectores del ejército. Para desviar la atención de los problemas internos, Chávez recurrió, a comienzos de 2005, a una crítica aún más fuerte al Plan Colombia y el imperialismo estadounidense, a la exaltación del nacionalismo en contra de Colombia, calificada de títere de Washington, y comenzó a multiplicar los gestos de apoyo a las FARC. Finalmente, les reconoció estatuto de beligerancia.

Por el temor a una explosión interna en Venezuela o de que Chávez desviara la agitación hacia un enfrentamiento abierto con Colombia contando para ello con el apoyo de las FARC, el eje de las preocupaciones estratégicas de Washington se desplazó hacia Caracas y se orientó más bien a contener a Chávez y su presunta alianza con la guerrilla colombiana. Washington temía tal vez que Chávez saliera consolidado de la confrontación interna y optara por un régimen autoritario, claramente antiestadounidense y belicoso con Colombia, que indujera la desestabilización total de ambos países, de la región andina y el hemisferio. Y, desde luego, tenían sobre todo por la suerte del petróleo.

Los estrategas del Pentágono decidieron entonces crear en Colombia un muro de contención militar a las pretensiones de Chávez y de sus presuntos aliados, las FARC. Washington duplicó su ayuda y asistencia militar a Colombia. Los asesores estadounidenses llegaron a 4.000 en 2006 y trajeron consigo alta tecnología militar. El gobierno colombiano militarizó la nación, impuso una economía de guerra y paralizó todas las transformaciones políticas.

La tensión entre Venezuela y Colombia colocó a las dos naciones al borde del conflicto. Chávez retiró al embajador de Bogotá y movilizó sus tropas a la frontera. Colombia, cuyo número de soldados profesionales llegaba ya a 120.000, hizo otro tanto con su embajador y una parte de su ejército. Desde entonces, la ONU, la UE y la Organización de Estados Americanos no han cesado de ejercer sus buenos oficios para evitar el estallido. Gracias a esa presencia se ha evitado hasta ahora el enfrentamiento.

La tensión entre Colombia y Venezuela, que constituían la nuez de la CAN, hizo que ésta desapareciera en la práctica. La inestabilidad afecta a toda el área, donde se extiende la polarización entre los simpatizantes del movimiento bolivariano Chávez-FARC y la institucionalidad imperante en la región. Los gobiernos de Ecuador, Perú y Panamá apoyan al Estado colombiano. Otro tanto hace el resto de los gobiernos latinoamericanos, con excepción de Venezuela. Hacia 2010, lo único cierto es que la CAN está dividida y EEUU ha clavado su ancla militar en el corazón de los Andes.

Cambio de política contra las drogas y paz

Este último escenario supone también el fracaso del Plan Colombia en su doble propósito: disminución del narcotráfico y contención o fin del conflicto armado interno. Pero, al contrario del anterior, tiene un final feliz. Se podría abrir paso a finales de la década, durante la campaña electoral de 2008 en EEUU.

Hacia 2007 resulta manifiesto que los multimillonarios aportes de EEUU y su compromiso creciente con el conflicto colombiano y la lucha contra las drogas han sido ineficaces o incluso contraproducentes. Es cierto que el ELN firmó el acuerdo de paz en 2003, pero lo hizo más por la presión de los paramilitares que por el Plan Colombia. En cambio, las FARC, fortalecidas por sus vínculos con mafias internacionales de drogas y armamento, han podido resistir el embate militar patrocinado por Washington. Los cultivos ilegales, lejos de disminuir, se han desplazado más adentro en la selva amazónica y han traspasado fronteras vecinas. Los traficantes de drogas y armas se han beneficiado del caos generado por la guerra. Al mismo tiempo, la producción de marihuana en territorio estadounidense no ha cesado de aumentar, y sus anfetaminas han reemplazado en buena parte a la cocaína. Ante este fracaso inocultable, la política antidrogas y el Plan Colombia se vuelven tema central de la campaña de 2008 en EEUU. Los contribuyentes se niegan a seguir aportando a una guerra inútil. El nuevo Gobierno decide entonces, en 2009, comenzar a legalizar algunas drogas someténdolas a severos controles, y dedicar a la educación y la salud los recursos que consagraba a la guerra, lo que ya había comenzado a realizar el gobierno anterior. Renuncia así mismo a seguir empujando a los países productores hacia guerras sin futuro que los desestabilizan, y prefiere fortalecer sus economías mediante inversión directa, créditos blandos, ventajas arancelarias y libre comercio.

De inmediato, los precios de la marihuana y la cocaína bajan dramáticamente. La mayor parte de los cultivos son abandonados. Algunos cultivadores derivan hacia la heroína, pero esta producción se controla con mayor facilidad puesto que la amapola se siembra en las cumbres andinas en su mayor parte deforestadas. Así pues, se debilita de repente la mayor fuente de ilegalidad, corrupción y violencia en Colombia. Reducidos sus ingresos, las FARC intentan resistir multiplicando el secuestro, pero este recurso no logra reemplazar los de la droga y sí aumenta el rechazo de la población. Por eso, en este año, 2010, han dejado conocer su disposi-

ción a negociar con el Gobierno. Finalmente, tras 50 años de ilegalidad, violencia y guerra, Colombia puede empezar un lento pero sólido camino de reconstrucción económica, social, ética y política.

Conclusiones

De las anteriores consideraciones se puede concluir que:

1. El primer paso para comenzar a resolver los problemas colombianos consiste en encontrarle una salida negociada al conflicto armado.

2. Si, con la movilización de los colombianos y el apoyo europeo, se logra darle prioridad a las dimensiones sociales del Plan Colombia, sin abandonar por ello algún fortalecimiento militar del Estado, sería quizás posible alcanzar la paz en el mediano plazo y comenzar la reconstrucción del país.

3. Pero si, por el contrario, el Plan conserva su orientación esencialmente militar, lo más probable es que el conflicto se profundice y amplíe aún más. En ese caso, dos alternativas aparecen como posibles.

4. La aplicación del Plan Colombia en su versión más militar, combinada con una eventual crisis social y una polarización política interna de Venezuela, podría derivar hacia un desplazamiento del eje del conflicto y la internacionalización mayor del mismo en el marco de la agudización de la crisis andina. En efecto, para hacer frente al deterioro de la situación interna, Chávez podría recurrir a una exaltación del nacionalismo contra Colombia y a un acercamiento a las FARC que pusiera en alerta a EEUU. Esta nación podría reorientar entonces sus mayores preocupaciones estratégicas hacia Caracas, y convertir a Colombia en bastión militar contra una real o presunta alianza de Chávez y las FARC y otras fuerzas contestatarias de la región.

5. Pero el fracaso del Plan podría también inducir, hacia fines de la década, una revisión de la política de Washington contra las drogas. Una legalización controlada de las mismas pondría fin a la mayor fuente de ilegalidad y violencia en Colombia y eliminaría los principales recursos de las organizaciones armadas ilegales. La pacificación de Colombia contribuiría al restablecimiento de toda la región andina.

6. De todos modos, Colombia no podrá recuperar una sólida estabilidad mientras la crisis de hegemonía política y de modelo económico no obtengan algún tipo de solución, así sea incipiente y parcial.

7. Entre tanto, la actual situación contribuye decisivamente a desarticular los proyectos de integración regional y latinoamericana, y convierte a Colombia en pieza funcional para la consolidación de la hegemonía estadounidense en la región y el continente, lo que coloca al país en contravía de la Venezuela de Chávez y de los demás movimientos contestatarios que parecen cobrar fuerza en América Latina.

Cuadro 1

Colombia. Matriz de escenarios

Ámbitos y actores	Escenarios	Conflicto y narcotráfico	Instituciones políticas	Economía	Sociedad	Relaciones internacionales
Guerra endémica	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Colombia: militar. - Diálogos con FARC: fin en 2002. Repliegue rural, terrorismo urbano, alianza con mafias internacionales. - Conflicto endémico. - ELN: acuerdo en 2003, muchos pasan a FARC. - Narcotráfico: se desplaza pero aumenta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos autoritarios desde 2002: ausencia de reformas, continúa la corrupción. - Mano dura, represión a movimientos independentistas - 2010: campaña por la paz. 	<ul style="list-style-type: none"> - 2002: fuga de capitales, recesión y crisis cambiaria. - 2003: ligera reactivación (3%) por mano dura. - Apoyo a PyMES. - Problemas: inseguridad, déficit fiscal, deuda, desempleo (25%). 	<ul style="list-style-type: none"> - Crece la desigualdad. - Desempleo, erosión de las clases medias, concentración de riqueza en grupos. - Desplazamiento masivo a ciudades. Desmovilización ciudadana, repliegue individual. 	<ul style="list-style-type: none"> - EEUU: apoyo militar, tutela. - UE: se limita a DDHH, ayuda a desplazados. - Venezuela, desbordamientos de guerra provocan tensión peronruptura por lazos comerciales. - Apoyo a las FARC. - CAN: existencia nominal. - Actitud individual y defensiva ante conflictos. 	
Paz negociada	<ul style="list-style-type: none"> - Influjos de sociedad y de UE: Plan Colombia, más social. - Acuerdos: 2003: con el ELN; 2004: con las FARC y paramilitares. - Seguridad: mejora; el narcotráfico se desplaza y disminuye, pero continúa. 	<ul style="list-style-type: none"> - 2002: triunfa movimiento independiente. - Contra corrupción y clientelismo. - Acuerdos 2005: Constitución (reforma política, descentralización, participación, Estado interventor). - Partidos: centroizquierda y derecha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdos sobre apertura selectiva, reforma agraria, gas-ta social positivo. - Ayuda externa, inversión. - Problemas: déficit fiscal, deuda, crecimiento 2004-2005: 5-6%; después: 4-5%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desigualdad: desde 2005 disminuye. - Satisfacción. - Grandes grupos consolidan empresas, alianzas con transnacionales. - Desempleo desciende pero continúa (16%). - Lucha social. 	<ul style="list-style-type: none"> - EEUU: política antinarcotráfico, más comercio y menos guerra. - UE: apoyo a reconstrucción, desplazados y sociedad civil. - Venezuela: satisfacción. Apoyo a centroizquierda. - CAN apoya negociaciones y activa comercio regional. 	
Desplazamiento del conflicto (variación del primer escenario hacia 2004)	<ul style="list-style-type: none"> - Venezuela en 2002: recesión y polarización. - 2003: Chávez desvía tensión interna hacia Colombia; 	<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos autoritarios desde 2002: ausencia de reformas, continúa corrupción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Crece la desigualdad. - Desempleo, erosión de las clases medias, concentración en grupos. 	<ul style="list-style-type: none"> - 2002: recesión y crisis cambiaria. - 2003: ligera reactivación (3%). 	<ul style="list-style-type: none"> - EEUU participa más en el conflicto, UE y ONU diplomacia para la paz. 	

— Cuadro 1 (cont.)

Colombia. Matriz de escenarios

Ámbitos y actores	Conflicto y narcotráfico	Instituciones políticas	Economía	Sociedad	Relaciones internacionales
Escenarios					
Desplazamiento del conflicto (variación del primer escenario hacia 2004) (cont.)	<ul style="list-style-type: none"> - brinda apoyo a las FARC y reta al Plan Colombia y a EEUU. - EEUU: en 2004 se fortalece Plan Colombia contra inestabilidad en el área. - Colombia: bastión de EEUU. - Conflicto Venezuela-Colombia: se internacionaliza la guerra. - Ecuador, Perú y Panamá apoyan a Colombia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mano dura, represión a movimientos independentes. - Movilización nacional militar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desplazamiento masivo a ciudades. - Desmovilización ciudadana, repliegue individual. 	<ul style="list-style-type: none"> - 2004: economía de guerra rs. alianza Chávez y FARC. 	<ul style="list-style-type: none"> - CAN: queda en <i>stand by</i>. - Ecuador y Perú: apoyan al gobierno colombiano.
Legalización y paz (variación del primer escenario hacia 2010)	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Colombia: militar. - Diálogos con FARC: fin en 2002. - Conflicto endémico. - ELN: acuerdo en 2003. - El narcotráfico se desplaza pero aumenta. - Narcotráfico en 2009: EEUU legaliza drogas, caen precios y negocio. - Paz: 2010. las FARC dispuestas a negociar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos autoritarios desde 2002: ausencia de reformas, continúa corrupción. - Mano dura, represión a movimientos independentes. - 2005: Fracaso del Plan Colombia. - 2006: reorganización de partidos. - 2010: triunfo candidato de centroizquierda 	<ul style="list-style-type: none"> - Crece desigualdad. Desempleo, erosión de las clases medias. - Concentración en grupos. - Desplazamiento masivo a ciudades. - Desmovilización ciudadana, repliegue individual. - 2008: renace movilizaciones. - 2001: se fortalecen movimientos de paz. 	<ul style="list-style-type: none"> - 2002: fuga de capitales, recesión y crisis cambiaria. - 2003: ligera reactivación (3%). - Apoyo a PyMEs. Inestabilidad económica. - Inseguridad, déficit fiscal, deuda, desempleo (25%). - 2010: nuevas expectativas de reconstrucción. 	<ul style="list-style-type: none"> - 2008: EEUU cambia política antidrogas: más apoyo a lucha contra la pobreza. - 2010: se normalizan relaciones con Venezuela y reanición de la CAN.

Bibliografía

- García, Andelfo: *Plan Colombia y ayuda estadounidense: gestación "interméstica"*, Informe de la investigación realizada para el Programa de Estados Unidos auspiciado por el Iepri, Bogotá, 2001a.
- García, Andelfo: "Colombia-Estados Unidos: Alianza antidrogas" en Luis A. Restrepo (dir.): *Síntesis 2001. Anuario Social, Político y Económico de Colombia*, Universidad Nacional-Iepri/TM, Bogotá, 2001b.
- Jenkins, Brian Michael: "Colombia: Crossing a Dangerous Threshold" en *The National Interest* N° 6220, Invierno 2000/2001.
- Ministerio de Defensa: Documentación inédita.
- Ramírez, Socorro: "Colombia, la crisis andina y la unidad sudamericana" en Luis A. Restrepo (dir.): *Síntesis 2001. Anuario Social, Político y Económico de Colombia*, Universidad Nacional-Iepri/TM, Bogotá, 2001.